

# La dura batalla por la autorregulación en el Reino Unido

Los medios de comunicación británicos han recorrido un largo camino. Han pasado más de 60 años desde el control ejercido por el Gobierno sobre los medios de comunicación hasta el paulatino establecimiento de la autorregulación profesional. Es la historia de cómo, con las únicas limitaciones de las restricciones de papel y de las leyes contra la difamación y sobre secretos oficiales de la posguerra, se pasó a la Press Complaints Commission.

**DAVID CHIPP**

**Y**a hace casi 60 años que me inicié en el periodismo. Si por aquel entonces se hubiera mencionado la autorregulación, creo que nadie habría tenido la más mínima idea de lo que esto significaba. No existía un código universal de conducta periodística ni programas formales de formación; aprendíamos sobre la marcha. Cualquiera que tuviera dinero podía crear un periódico y los únicos obstáculos eran los imperativos económicos del libre

mercado. La prensa británica estaba limitada por el racionamiento del papel durante la posguerra, pero también, y de manera más eficaz, por las estrictas leyes contra difamación y por la Official Secrets Act (Ley sobre Secretos Oficiales), que pretendía equiparar lo que las autoridades veían como “interés nacional” con la “seguridad nacional”. Hoy en día, esto sigue vigente, excepto, por supuesto, la cuestión del racionamiento.

Además existía la obsesión oficial

**David Chipp** es miembro de la Press Complaints Commission británica.

británica por el secretismo, una obsesión compartida por políticos y burocratas. Algo que, por cierto, continúa hasta nuestros días, como lo demuestra la habitual obstrucción de las autoridades al funcionamiento de la Freedom of Information Act. También los editores y reporteros se vieron limitados por los propietarios, quienes, a pesar de que hacían todo lo necesario para promover sus ideas políticas, eran a menudo demasiado mojigatos y victorianos en lo que respectaba a su visión del gusto y la decencia. A finales de la década de los veinte, el primer ministro, Stanley Baldwin, describió a estos propietarios como los que “ejercen un poder sin asumir ninguna responsabilidad: la prerrogativa de las prostitutas a lo largo de los siglos”\*. Sin embargo, ellos demostraron que se sentían la clase dirigente básica en 1936, cuando decidieron que los periódicos británicos no publicaran nada sobre el romance del rey Eduardo VIII con Wallis Simpson. El resto del mundo lo sabía, pero consideraron que era un tema demasiado delicado para sus propios súbditos. No me imagino eso en nuestros días.

Después de la II Guerra Mundial hubo un Gobierno socialista en Inglaterra y muchos de sus partidarios en el Parlamento vieron el poder de los propietarios como uno de los peores ejemplos del capitalismo devastador. Además, creo que los hombres que volvían de la guerra –y muchos de los

que en aquel tiempo nos incorporamos al negocio lo éramos– tendían a cuestionar mucho más los límites impuestos a las publicaciones. Así, el periodismo pasó a ser visto por parte de muchos miembros del Gobierno como un peligro para el orden establecido y, por tanto, debía ser controlado. No era una actitud nueva. Esto había sucedido durante más de 400 años, cuando la Iglesia, a través de sus obispos, tenía el poder. Incluso consideraban peligroso que la gente leyera u oyera las escrituras en lengua vernácula.

En la década de los cuarenta se alzaron voces pidiendo legislación que controlara la prensa. Sesenta años después aún existen esas demandas. Los políticos británicos de todos los partidos, independientemente de lo que digan, siempre han aborrecido a la prensa. Nos sobreestiman cuando somos débiles y nos subestiman igualmente cuando somos fuertes.

Cuando el Gobierno socialista de Clement Attlee llegó al poder en 1945 nacionalizó muchas cosas: los servicios sanitarios, los ferrocarriles, el carbón y el acero. Pero fue un hombre sabio y también muchos de los miembros de su Gobierno. Con mucha sensatez, rehusó meterse con la prensa. En su lugar, hizo algo muy inglés: estableció una Comisión Real. Estos comités investigadores, presididos normalmente por un ilustre abogado, se reúnen durante meses, si no años, y finalmente presentan informes y re-

comendaciones. A menudo son un método utilizado por los gobiernos para calmar las críticas. Sobra decir que sus recomendaciones suelen ser obviadas.

La primera Comisión Real sobre la Prensa se estableció en 1947. Trató sobre el enorme aumento en la circulación de periódicos populares y sobre el aún mayor incremento del sensacionalismo. Al mismo tiempo, la prensa británica (propietarios, periodistas y sindicatos) creían firmemente que su conducta no era asunto del público general. Ellos, y sólo ellos, eran responsables de lo que el poeta y periodista Rudyard Kipling describió como “ese oscuro arte al que llamamos prensa diaria”\*. Uno de los resultados de esa Comisión fue el establecimiento en 1953 del General Council of the Press. Su tarea era preservar la libertad de prensa y combatir los abusos de esa libertad, como la invasión de la privacidad; un estímulo sexual. ¡En el Consejo no había personas ajenas a la profesión! Todos sus miembros, incluido el presidente, eran periodistas.

La prensa lo había organizado a regañadientes y tuvo muy poco efecto.

Por lo tanto, se estableció otra Comisión Real en 1962, que recomendó que el presidente fuera independiente y que los miembros no pertenecieran a la profesión. El Press Council, como se llama ahora, aceptó lo primero, pero ignoró lo segundo.

La actitud de la prensa seguía siendo la misma, sintetizada quizás por Rupert Murdoch quien dijo que era “el brazo de la clase dirigente”\* y despreció el trabajo del Consejo de Prensa australiano por ser resultado de la “interferencia de editores fracasados y profesores retirados”\*. ¡Cómo cambian las cosas! Los representantes y editores de Murdoch son ahora fervientes partidarios de la Press Complaints Commission.

A mediados de los sesenta, con otro Gobierno laborista en el poder, se designó otra Comisión Real. Su informe decía que el Press Council debía financiarse mejor, ser más rápido en sus procedimientos, presentar un código de conducta y, lo más importante, tener una mayoría de miembros que no pertenecieran a la profesión. Los periodistas ingleses siempre se habían resistido a tener un código, pues para ellos era demasiado duro admitir que



CHIPP

En los años 20 Stanley Baldwin definió a los propietarios de periódicos como “los que ejercen un poder sin asumir ninguna responsabilidad”.

estaban equivocados y casi imposible disculparse.

De nuevo, muy a su pesar, el sector admitió que debía haber una mayoría ajena a la profesión, concedió un poco más de dinero, pero se siguió oponiendo a redactar un código de conducta obligatorio. El Press Council siguió siendo en muchos aspectos ineficaz, lento y prepotente. Para muchos no era un órgano creíble. Especialmente en un momento en que, para muchos periodistas, los estándares de los periódicos más sensacionalistas estaban cayendo vertiginosamente. Uno de los grandes editores de posguerra fue un genio llamado Hugh Cudlipp. Después de la II Guerra Mundial había dirigido el *Daily Mirror* hacia nuevas cotas de influencia y circulación. Ya en su vejez irascible, en una misa conmemorativa se dirigió a la congregación y dijo que habíamos entrado en la Oscura Era del periodismo de tabloides. Una era “donde el periodismo de investigación en favor del interés público se despoja de su integridad y se convierte en periodismo intrusivo para los lascivos, donde nada que sea personal es ya sagrado o secreto y el derecho básico a la privacidad se desvanece en favor del beneficio instantáneo de la publicación”<sup>98</sup>.

Esta opinión era compartida por muchos y, en lugar de establecer otra Comisión Real, el Gobierno conservador instauró un comité departamental con David Calcutt a la cabeza, un

abogado con un máster en el Cambridge College. Antes de que el informe fuera publicado, un ministro del Home Office dijo en una entrevista para la televisión que en el Parlamento había un desprecio generalizado por la prensa y que, a menos que cambiara su actuación, creía que la “prensa popular estaba en las últimas”<sup>99</sup>. (Poco después, Mellor tuvo la oportunidad de juzgar por sí mismo. Después de posar con su feliz familia para la campaña electoral, se reveló que también tenía una amante. Esta señora contó a los divertidos lectores que el ministro disfrutaba de su congreso sexual icon la camiseta del Chelsea puesta! Éste sí fue un caso donde lo que era genuinamente de “interés público” coincidía con los “intereses del público”. Muchos órganos autorregulatorios y autores de códigos han batallado con esta diferenciación.)

Mientras Calcutt y su comité deliberaban, algunos periódicos británicos seguían dando ejemplos de irresponsabilidad y mostrando indiferencia por la necesidad de establecer algún tipo de control, una idea que se fue extendiendo entre el público general. Pero los propietarios y periodistas, incluyendo a Murdoch y sus editores, acabaron alarmándose por el peligro de la legislación y cooperaron con la investigación.

Cuando se presentó el informe, se recomendó el establecimiento de una Press Complaints Commission (PCC), en lugar del desacreditado Press

Council. Se aceptó. Las organizaciones de prensa, tanto nacionales como regionales, comenzaron a organizarla y ordenaron a un comité de editores que preparara un código de conducta. Un ilustre sociólogo, el profesor Oliver McGregor, que había presidido la última Comisión Real, fue nombrado presidente. Había una mayoría de miembros ajenos a la profesión, entre los que estaba el profesor Pinker. Se nombraron dos miembros ‘neutrales’ para que llenaran el vacío existente entre la prensa y el público. Yo, que ya me había retirado del periodismo activo, fui uno de ellos.

Habrán notado que ya no había abogados entre los miembros ni tampoco dinero procedente del Gobierno. Calcutt había dejado claro que quería una Comisión de Quejas. Se concentraría en ese aspecto y, a diferencia del antiguo Press Council, no perdería tiempo ni energía en hacer campaña por la libertad de prensa. McGregor estaba totalmente de acuerdo con esa política y creía que esos asuntos debían ser tarea propia de los periódicos. Además, se acordó que no se aceptarían quejas de terceros que hicieran perder el tiempo. Nuestro trabajo era

satisfacer al público. Realmente en aquel momento estábamos en período de prueba y, de hecho, nos dieron 18 meses para que mostráramos resultados. Tanto los editores como los políticos nos veían con sospecha y duda. En concreto, la gente quería ver cómo nos las arreglábamos con asuntos como la privacidad y el factor del ‘interés público’. Calcutt y otros habían expresado dudas sobre el código y algunos estaban indignados porque los editores de los tabloides fueran miembros de la Comisión.

De hecho, un reciente y destacado caso que involucraba a un miembro del Parlamento y al periódico *News of the World* provocó una gran preocupación porque su editora era uno de los miembros de la Comisión. Naturalmente, ella no participó en nuestras deliberaciones, pero eso no reprimió las críticas. Algo positivo fue que la creación de la PCC significó el comienzo de la retirada del antiguo personal, una clara mejora en la eficacia y la consiguiente agilización en el manejo de las quejas.

McGregor era optimista en cuanto a que la amenaza del control legal había disminuido. Pero aún había crí-



CHIPP

Editores y  
periodistas se  
opusieron a un  
código de  
conducta  
obligatorio hasta  
que se les  
amenazó con  
imponerlo por ley.

ticos que consideraban decepcionante el primer año de la comisión y que creían que era inevitable adoptar algún tipo de regulación.

El presidente se equivocaba al ser optimista y fue la publicación de asuntos relacionados con la Casa Real lo que supuso el mayor peligro para que siguiera existiendo un sistema voluntario. Él mismo era un monárquico convencido y él, y para ser sincero todos nosotros, creímos lo que se rumoreaba en Buckingham Palace acerca de que iba a salir una publicación sobre la deteriorada relación entre el príncipe Carlos y la princesa Diana.

La princesa y su cuñado, que también resultó ser el principal secretario privado de la Reina, declararon que ella no había tenido nada que ver con el libro publicado en junio de 1992. Cuando aparecieron extractos del libro en la prensa, McGregor hizo una declaración condenando este trato y calificándolo de una “detestable exhibición de los periodistas metiendo las narices en las almas de la gente”\*. Se trata de una cita de Virginia Woolf, una novelista inglesa menor (y, en mi opinión, muy sobrevalorada). El presidente no había informado a toda la comisión de lo que pretendía hacer. Pero debo confesar que yo formaba parte de esa ridícula declaración y que resultó ser mucho más ridícula e inapropiada cuando trascendió que el Palacio nos había engañado y que la princesa Diana había cooperado estrechamente con el

autor y había orquestado toda la publicidad.

La comisión, y en particular el presidente, quedaron en evidencia por todo este asunto, que durante un tiempo empañó todo el trabajo de la comisión. McGregor sufrió un duro golpe, especialmente cuando el altivo Mellor anunció que iba a pedir a Calcutt que revisara cómo estaba funcionando la autorregulación. Calcutt consideró que la PCC había fracasado. Recomendó crear por ley un Press Tribunal, algo que había propuesto que su primer informe, pero que no recibió apoyo. Esta vez podía hacerlo. Pero a pesar de sus ataques y de los de otros, nadie hizo una sugerencia viable que pudiera ser una alternativa para la Comisión.

La Comisión volvió a reinventarse a sí misma y fortaleció el Code Committee. Consiguió fortalecerse a sí misma y fortalecer su reputación, principalmente gracias a los esfuerzos de David English, que revivió los destinos editoriales del *Daily Mail*. En realidad, fue a partir de 1993 cuando la PCC surgió tal y como la conocemos hoy. McGregor, que con su visión y energía había creado la Press Complaints Commission, ya era mayor y no se sentía con fuerzas, por lo que se retiró en 1994. Lo sucedió lord Wakeham, un político *tory* que fue capaz de manejar brillantemente a los críticos del Parlamento y de cualquier otra parte. 

\* Traducción libre.